

La cultura política después del 6 de julio

"El gobierno arbitrario tiene su base no en la fuerza del Estado o del jefe, sino en la debilidad moral de los individuos que se someten casi sin resistencia al poder dominante"

Federico Ratzel

José Antonio Crespo*

MODERNIZACION, PARTICIPACION POLITICA Y ESTABILIDAD

La cultura política se refleja y expresa en parte a través de la participación política de una sociedad determinada, o grupo dentro de ella. A su vez, en tanto que la cultura política guarda un cierto grado de congruencia con el sistema político, éste condiciona el tipo de participación ciudadana que le es funcional para su consolidación y continuidad. Una democracia política moderna requiere de un tipo de cultura, denominada por los clásicos como participativa-racional, que implica entre otras

cosas un cierto interés e información política, así como un sentido de eficacia política, es decir la idea de que se tiene derecho para influir sobre el poder a través de alguna de las posibles formas de participación, y la convicción de que ésta tendrá los efectos deseados en alguna medida.¹

A su vez, la estabilidad del sistema exige que esa participación se canalice a través de normas y procesos institucionales, pues de lo contrario provoca tensiones que pueden llegar a quebrar el sistema político.

* Sociólogo, investigador del ITAM, colaborador de la Revista Vuelta.

1 Cfr. ALMOND G. Y S. Verba, 1963, *The Civic Culture; Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey, Princeton University Press. Cap. IV.

Por otro lado, en tanto que la modernización social en sus diversas facetas genera múltiples estímulos para la participación política de sectores cada vez más amplios de la sociedad, se consideró en los años 50 que la estabilidad política de tales sociedades sólo se podría conseguir a través de instituciones que permitieran canalizar esa participación masiva; es decir, la modernización social tendría que desembocar en una democracia política estable.² Sin embargo, tales hipótesis no daban cuenta de sistemas políticos de sociedades en plena modernización, que mostraba cierto grado de participación en diversos sectores sociales, así como una estabilidad probada, y que, sin embargo, no caían cabalmente en la categoría de democracias políticas. Aún más, algunos de estos sistemas incluso mostraban rasgos claramente totalitarios, como era el caso de la Unión Soviética y de China. Así, surgió la idea de que la participación política no presentaba necesariamente, rasgos democráticos, por lo que se le clasificó en dos categorías a partir de su intención; la participación "democrática", que pretende ejercer una influencia decisiva sobre el proceso de toma de decisiones y la participación "corporativa" (también llamada controlada o clientelar), a partir de la cual se trueca el apoyo político al Estado a cambio de ciertas concesiones de tipo económico o social. No busca influir sobre las decisiones y, sin embargo, hace que sus

demandas básicas sean tomadas en cuenta por la cúpula del poder, al menos en alguna medida. Así, este tipo de participación era compatible con las necesidades de los Estados de tener un apoyo masivo para lograr estabilidad y continuidad, sin que ello implicara compartir el poder con las bases de la sociedad.³

Desde el punto de vista de la cultura política, la participación corporativa, sin corresponder exactamente a la subcultura tradicional -totalmente pasiva y desinteresada- era una derivación de ella, adaptada a las necesidades de un Estado modernizador, más no políticamente democrático. De ahí que se le pudiera encontrar en los sectores más atrasados de la sociedad. En cambio, las teorías de la modernización apuntaban que ésta producía una subcultura de participación democrática. De manera que la urbanización, el alfabetismo y la escolaridad, así como niveles más altos de vida, eran variables relacionadas directamente con la participación democrática, e inversamente con la participación corporativa.⁴ De acuerdo con ello, la modernización social, en la medida en que se ampliara a la mayoría de los sectores sociales, tendría que ejercer sus efectos sobre la cultura política, la cual a su vez, ejercería una fuerte presión sobre las estructuras del Estado, de modo de democratizarlo políticamente.

2 Cfr. LIPSET, S.M., 1963, *El hombre político; las bases sociales de la política*. Buenos Aires, Eudeba.

3 Cfr. HUNTINGTON Y JOAN NELSON, 1976, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Harvard University Press.

4 *Ibid*

EL CASO DE MEXICO

La configuración del Estado mexicano posterior a la revolución adoptó la forma de un autoritarismo corporativo, con un fuerte aparato institucional que permitió incorporar a los sectores movilizados durante la lucha armada, con lo que consiguió un nivel de estabilidad y continuidad muy superior al de sus contrapartes latinoamericanos. La mayoría de estos sectores se ubicaban aún en una subcultura fundamentalmente tradicional por lo que no pusieron resistencia a las reglas autoritarias del régimen post-revolucionario, con tal de que éste les garantizara la satisfacción mínima de sus demandas.

Los sectores modernizados, sobre todo de clase media acomodada y alta, cuya subcultura tenía menos posibilidades de adecuarse al patrón corporativo de participación política, tuvieron las siguientes opciones:

1. Configurarse como los grupos dirigentes del Estado y ejercer su participación política desde la cúspide del sistema sin frenos reales a su poder; como no fueron los que la propia jerarquía política o burocrática imponen;
2. organizarse desde la iniciativa privada para negociar directamente con el Estado la promoción de sus intereses, cosa que fue posible sobre todo a partir del alemanismo;
3. presionar desde la oposición formal e informal para que el sistema se

democratizara, y pudiera ejercer una participación adecuada y eficaz.

Es claro que las dos primeras opciones eran compatibles con el mantenimiento de un esquema corporativo de participación controlada, por lo que sólo quienes eligieron la tercera alternativa se dedicaron desde diversas trincheras a presionar por el cambio del sistema político en sentido democrático (si bien los grupos de izquierda, entonces preocupados sobre todo por la democracia social y no tanto política, prefirieron buscar una vía revolucionaria al margen de las instituciones), o bien abandonaron la esfera política de acción, al ser ésta incompatible con el tipo de participación propia de su subcultura.

De tal forma que el marco de la participación política en México contradecía al de las democracias-occidentales, según el cual, conforme se moderniza la población, presenta, mayores deseos por participar. En nuestro país, en cambio, las zonas geográficas y los sectores sociales más humildes registraban índices mayores de participación. Las zonas más ricas, y los estratos más modernos en cambio, presentaban una fuerte oposición al sistema, expresado a través del abstencionismo electoral o del voto en favor de la oposición formal (o como ya se dijo, una participación no institucional).⁵

5 Ofr. REYNA, José Luis, 1972, "Movilización y participación políticas: discusión de algunas hipótesis para el caso mexicano", en *El perfil de México en 1980*. Vol. 3, México, Siglo XXI, pp. 505-535.

Ante tal situación se esperaba que, en algún punto del desarrollo social y económico del país, la contradicción entre la cultura política de los sectores modernizados, cada vez mayores, y el sistema autoritario, generaría una presión que obligaría a la transformación en sentido democrático. Pero hay tres elementos, al menos, que podrían retrasar el proceso de manera considerable, aún en un estado avanzado de modernización social:

1. La cultura es el elemento de la sociedad que más tarda en cambiar, aún cuando hay condiciones sociales y económicas que pueden presionar para su modificación. De tal forma que buena parte de las clases medias recién creadas, pese a su mejoría económica y social y a su contacto más estrecho con la cultura moderna de las ciudades, podía adaptarse al modelo corporativo de participación, incluso como consecuencia de su progreso y como la vía más racional para continuar en ascenso. A fin de cuentas, la participación controlada puede concebirse como un punto intermedio entre la pasividad tradicional y la participación más moderna, propiamente democrática.
2. El carácter institucional del autoritarismo mexicano permite un grado de participación y crítica relativamente mayor que otros tipos de autoritarismo, más cerrados y dictatoriales, por lo que la contradicción entre aspiraciones democráticas y proceso político se hace menos perceptible. Además, genera la

expectativa y la creencia de que el sistema va evolucionando hacia una democracia política auténtica. La presión en favor de un cambio decisivo pierde fuerza ante esta creencia, la que a su vez se ha visto reforzada por una serie de reformas periódicas en el ámbito político y electoral.⁶

3. Los sectores medios acomodados, principales detentadores de la subcultura democrática, en realidad podían beneficiarse del sistema autoritario a través de la dirección del Estado o la negociación privilegiada con éste. El grupo que persistía en un cambio democrático, en realidad, constituyó una minoría durante mucho tiempo. Sin el liderazgo de las clases medias en favor de la democracia, se hace difícil pensar en un cambio sustantivo en esa dirección.⁷

Ante ese panorama, es claro que la modernización social por sí misma no necesariamente resulta incompatible con un autoritarismo flexible e incluyente, como lo ha sido el mexicano, si bien prepara el terreno para que, bajo ciertas condiciones,

6 Cfr. MOLINAR, Juan, 1987, "Viscisisitudes de una reforma electoral", en S. Loaeza y R. Segovia (Coord.) *La vida política mexicana en la crisis*. México, El Colegio de México, pp. 25-40.

7 Cfr. LOAEZA, Soledad, 1983, "El papel político de las clases medias en el México contemporáneo", *Revista Mexicana de Sociología* XLV, 2 abril-junio.

pueda surgir una presión eficaz en favor del cambio democrático.

CRISIS ECONOMICA Y DEMOCRACIA

El acicate para la movilización ciudadana en favor de la democracia provino principalmente de la crisis económica, que si bien venía gestándose desde la década de los setenta, estalló de manera abrupta en 1982. Y se tradujo en una caída drástica de la legitimidad política, no sólo porque el mantener un mínimo de eficacia económica es una obligación de todo Estado, sino porque la ciudadanía identificó como causas cruciales de la crisis al despilfarro gubernamental, el abuso de poder y la corrupción, derivaciones todas del centralismo político propio del régimen priísta. La democracia política se pensó como posible salida a la situación, y como medio para prevenirlo en lo futuro.

En particular, la crisis económica provocó el deterioro del nivel de vida de la gran mayoría de la población. Por un lado, los sectores medios vieron frenadas sus expectativas de constante mejoría, lo que se tradujo en una movilización más intensa en contra del sistema.

Por su parte, los sectores populares dejaron de recibir lo que su apoyo al régimen les había reportado anteriormente. Y aún los grupos directamente beneficiados por el pacto corporativo, vieron los privilegios derivados de éste disminuir paulatinamente. El clientelismo supone, en

efecto, un apoyo político absoluto, pero condicionado a ciertas concesiones básicas.

El gobierno de Miguel de la Madrid, heredero de la crisis, prometió a cambio de la confianza ciudadana respetar los procesos electorales y sanear la economía y las finanzas públicas. En cambio, su política económica no logró resolver, ni siquiera atenuar, la crisis económica. Y en el terreno político, la respuesta fue el fraude electoral de grandes proporciones; la política de carro completo y una legislación electoral menos democrática que la instrumentada por López Portillo. El resultado fue el aumento del descontento ciudadano y la intensificación de la demanda por democracia política. Conforme fue transcurriendo el sexenio, estas tendencias se acentuaron.

En cuanto al comportamiento electoral, se invirtió por primera vez la relación entre modernización y participación política vigente en nuestro sistema. En efecto, en los procesos electorales de 1982 y 1985 se registró una disminución de la participación en los sectores populares, antes los más activos dentro de los patrones corporativos, y un incremento en la participación de los grupos modernos, con rasgos más democráticos.⁸ Lo que significa que, en plena crisis de legitimidad, quienes antes brindaban su apoyo al régimen dentro de la cultura clientelar, tendían a retirarlo absteniéndose, y quien antes se abstenía por

8 Cfr. LIMA, Consuelo y MONIQUE, Robert, 1988, "Movilidad electoral y modernización en México: 1961-1985", México, Revista Mexicana de Sociología. Año L. Núm. 2. abril-junio.

no encontrar un canal adecuado a su estilo de participación, de corte más democrático, respondió asistiendo a las urnas en un intento por ejercer a través de este medio, una presión más efectiva para obligar al régimen a auto-transformarse en sentido democrático. Obviamente, un sistema que ha sido confeccionado para dar cabida a un tipo de participación corporativa, e incompatible por tanto con una de tipo democrático, no puede resistir fuertes cambios en las pautas de participación ciudadana.

En vísperas de la sucesión presidencial, y dadas las circunstancias imperantes, resultó ser un grave error el designar como candidato oficial al Secretario de Programación y Presupuesto, principal artífice y responsable de la impopular política económica de ese sexenio; cerró de entrada la expectativa de un cambio con la renovación de poderes, que tan buen funcionamiento había mostrado en otras ocasiones para conservar la estabilidad del régimen. Como contraparte, la escisión dentro del partido oficial de un grupo que ofrecía una alternativa de retorno a la política de bienestar social, con reivindicaciones nacionalistas, y dirigido por el hijo del Presidente más querido y respetado de México (al menos del México popular), dejó a la candidatura oficial con un apoyo muy menguado.

Simultáneamente, el ofrecimiento de modernización política por parte del candidato oficial con vistas a recuperar el soporte de quienes demandaban esa reforma, entró en contradicción con la forma de llevar la campaña electoral, a través de

métodos de movilización totalmente tradicionales y anacrónicos lo que, lejos de lograr su objetivo, probablemente resultó contraproducente.

El resultado en las elecciones rebasó las expectativas del momento, con una votación para el PRI muy menor de la esperada. Lo inusitado fue un supuesto triunfo de Cárdenas frente a sus contrincantes que, aunque no reconocido por las autoridades electorales, sembró la duda de la legitimidad del proceso en su conjunto, y de la autenticidad de la victoria priísta. Si el triunfo del candidato neocardenista fue real o no, es algo cuya discusión queda fuera de este trabajo. Lo importante, en términos de la cultura política mexicana, es que buena parte de la ciudadanía lo dió por probable. La cuestión no fue entonces solamente el de si hubo fraude electoral o no, cosa normal en nuestra historia política, sino que con él se invertían los resultados de los comicios. Y sobre todo, que el voto opositor podía derrotar al poderoso partido oficial.

EFFECTOS DE LA JORNADA ELECTORAL DE 1988 SOBRE LA CULTURA POLITICA

Es claro que los resultados de una jornada electoral (reales, no oficiales), son efecto en primer lugar de la cultura política imperante en la víspera de los comicios. Los cambios sufridos por la cultura política durante el sexenio de De la Madrid pueden dar cuenta de los insólitos resultados de la elección del 6 de julio.

Por ejemplo, una mayoría nacional (72 por ciento) opinaba poco antes que las cosas iban mal en el terreno económico, y sólo un pequeño grupo (13 por ciento) pensaba que en el siguiente sexenio las cosas mejorarían.⁹

Por otro lado, un 82 por ciento consideraba que se requerían en el país profundos cambios a nivel económico, político y social, y el 88 sentía que los políticos sólo ven por ellos mismos.¹⁰

Sin embargo, muchos de los elementos tradicionales de la cultura política, que han contribuido a sostener el régimen priísta, seguían básicamente inalterados. Por ejemplo, todavía una mayoría (65 por ciento) consideraba como riesgoso el que la oposición ocupara el poder, idea que ha contribuido en mucho a sostener al PRI (voto estabilidad).¹¹ Asimismo la convicción de que el partido oficial podría perder las elecciones sólo era alentada por una quinta parte de la población. En efecto, la idea de la invencibilidad del PRI ha contribuido a proporcionarle un importante voto de inercia. (En el caso del voto dirigido a Salinas, en esta categoría se encontraba más de una tercera parte).¹²

No obstante, algunos indicios de cambios importantes pudieron ser registrados también en la víspera. Por un lado, de los

ciudadanos empadronados la gran mayoría manifestó un claro deseo de ir a las urnas, con lo que se abatiría el tradicional abstencionismo que tanto ha favorecido al partido oficial.¹³ La cifra oficial de 48 por ciento de abstención resulta poco creíble pues es el índice más alto del periodo priísta, precisamente en un momento de efervescencia política en el que las elecciones fueron las más competidas y estimulantes de la historia reciente. O bien implica que en las elecciones anteriores el abstencionismo fue mayor, y se le redujo alquímicamente.

Por otra parte, aunque la mayor parte de la ciudadanía seguía escéptica respecto de la limpieza electoral (88 por ciento en el DF), la mitad de esa proporción consideraba posible evitar el fraude.¹⁴ En efecto, la sensación de impotencia frente al abuso de poder es tal vez la causa cultural más importante de éste. En la medida en que tal actitud vaya desapareciendo, el sistema autoritario no podrá seguir operando. Y precisamente la importancia del pasado proceso electoral reside no sólo en que refleja los cambios culturales generados durante el sexenio que termina, sino que en sí mismo se puede constituir en un elemento central para modificar de manera decisiva la cultura política autoritaria del

9 BENDIXEN AND LAW, 1988, "Estudio sobre la actualidad nacional mexicana" en *El perfil de la Jornada*, julio 5.

10 *Ibid.*

11 GALLUP, 1988, *La Jornada*, 27 de junio.

12 *Ibid.*

13 En el DF, sólo el 9 por ciento de los encuestados manifestó que no deseaba votar, rsi bien el número de abstencionistas normalmente es mayor que el registrado por los sondeos de opinión. Cfr. COMECOSO, "Las elecciones en el Distrito Federal", en *El perfil de La Jornada*, julio 5, 1988.

14 *Ibid.*

país. La fuerte sacudida que recibió el partido oficial refleja que los motivos tradicionales de su apoyo electoral habían perdido intensidad, pero la experiencia misma podría quitar el soporte fundamental de dicho apoyo. En adelante, las razones que hasta ahora habían generado el voto prístia pueden perder su sentido básico. Atendiendo a sus motivaciones, el voto en favor del PRI ha sido clasificado de la siguiente manera:

- a) El voto ideológico, emitido a partir de la identificación del ciudadano con la ideología del partido, o la plataforma electoral que presenta antes de los comicios. En realidad, desde hace tiempo este voto ha sido mínimo y ha tendido a la baja, sobre todo a partir de la creciente desconfianza respecto de la sinceridad de los políticos oficiales en sus planteamientos y promesas.
- b) El voto de inercia, emitido por quien tiene la convicción de que el PRI siempre gana, y no quiere sufragar en favor de los seguros perdedores. Es previsible que este tipo de voto tienda a desaparecer una vez que ha quedado al descubierto la vulnerabilidad del partido oficial y en la medida en que empiece a difundirse la idea, ahora más creíble que nunca, que otro partido pueda asumir el poder en un futuro no lejano.
- c) El voto coercitivo, mediante el cual un ciudadano brinda su apoyo al partido oficial por temor a las consecuencias, en caso de no hacerlo así. Es posible que a partir de las elecciones pasadas, en las que muchos ciudadanos en posición vulnerable frente al poder no votaron por el PRI, ese temor desaparezca, al constatar que no provocó consecuencias negativas (a menos que los dirigentes sancionen en realidad a quienes hayan identificado como opositores electorales, lo que no es probable que suceda en gran proporción).
- d) El voto corporativo o clientelar, que se acuerda otorgar al partido oficial a cambio de algún tipo de concesión. En realidad, como se dijo antes, este motivo descendió a causa de la incapacidad del Estado para mejorar o mantener las tradicionales prebendas a sus asociados corporativos. No obstante durante la campaña se recurrió al gasto en enormes proporciones para asegurar y estimular este tipo de voto. Sin embargo, muchos de los tradicionales "acarreados" asistieron a los mítines, recibieron sus gratificaciones (más atractivas que nunca) y votaron en contra del tricolor. Mantener las clientelas tradicionales será cada vez más costoso, hasta hacerse insostenible.
- e) El voto por la estabilidad, emitido por quien considera que sólo el partido oficial tiene la capacidad para mantenerla, ante la ausencia histórica de un gobierno surgido pacíficamente de la oposición. Esta creencia ha sido una de las principales fuentes del voto en favor del PRI y éste lo ha sabido explotar adecuadamente. Tal vez los sectores más moder-

nos de la sociedad comparten, en su mayoría, esta idea. Buena parte de quienes votaron por un candidato opositor probablemente no deseaba que éste formara gobierno, al menos por ahora. Más bien tenía el objetivo de presionar al Gobierno para obligarlo a cambiar el sistema. Se tenía la convicción de que su candidato no ganaría, o que de hacerlo, difícilmente asumiría el poder (69 por ciento de Cárdenas, y 72 de Clouthier no pensaban en un posible triunfo de su candidato, según Gallup).¹⁵ A partir de los comicios de julio la vulnerabilidad mostrada por el PRI, empezará a generar expectativas de un posible gobierno de oposición en un futuro no lejano, incluso tal vez, en el siguiente sexenio. Los próximos seis años serán cruciales para preparar a la ciudadanía, así como a la élite gubernamental, para tal acontecimiento, que sería de darse, el primero de nuestra historia política. Es posible que se vea pronto una cámara baja con mayoría de oposición, legislaturas locales e incluso gubernaturas en manos panistas o cardenistas. Todo ello contribuiría a hacer creíble y aceptable la idea de un traspaso pacífico e institucional del poder a un grupo fuera de la "familia revolucionaria".

- f) El voto oportunista, que puede concebirse como una variante del voto clientelar, pero emitido por quien ha recibido o espera recibir del sistema algo más que

tortibonos, es decir, un puesto de dirección política o administrativa, un curul o una embajada. La disciplina y la lealtad a toda prueba habrían sido hasta ahora una condición indispensable para una carrera promisoría dentro del Estado. Ahora ello ya no es tan claro. Primero, porque estar postulado por el PRI ha dejado de ser garantía de triunfo y, a menos que se revierta su creciente deterioro, cada vez lo será en menor medida. En cambio quienes desafiaron abiertamente al sistema desde el seno del partido se han forjado una perspectiva que se antoja llena de posibilidades. Así, es probable que este apoyo deje de operar en el futuro, de no recuperarse la hegemonía priísta, lo que a estas alturas se percibe como francamente difícil.

CONCLUSIONES

En la medida en que las tendencias participativas y electorales registradas a partir de 1982 continúen, en la misma dirección, al partido oficial le resultará cada vez más difícil mantenerse en el poder, pues al mismo tiempo esa presión lo obligará gradualmente a aceptar unas elecciones competitivas, en las que no está claro si podría triunfar de manera clara y convincente.

Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que el PRI logre recuperar la confianza ciudadana al grado en que pueda vencer limpiamente a sus adversarios en la arena electoral, por más que esa posibilidad se vislumbra ahora como sumamente difícil.

15 GALLUP, op. cit.

La cultura política tal vez haya cambiado cualitativamente al adquirir la ciudadanía un sentido de eficacia política que antes no tenía. Pero la experiencia del proceso electoral de 1988 también podría provocar efectos favorables a la recuperación del partido oficial. Por ejemplo, no está claro si el abstencionismo, que ha sido claramente funcional a la conservación del régimen, disminuirá sustancialmente en el futuro. El ciudadano puede haber descubierto el valor del sufragio para presionar al régimen, incluso para desestabilizarlo, aunque sea por elevarle los costos políticos del fraude. Pero la misma aplicación de un fraude de imprecisas proporciones por parte del Gobierno, puede haber reforzado la desconfianza tradicional hacia las elecciones.

Por otra parte, existen muchos ciudadanos que bien podrían devolver su voto al PRI por los temores que ha despertado el 6 de julio, en relación con la estabilidad política. Pero no sabemos si esos electores son los suficientes como para que el partido gobernante recobre su fuerza. La propia democratización del Institucional podría a su vez generar una confianza renovada entre los votantes, pero ignoramos en qué grado.

Finalmente, la recuperación económica se ha manejado como una razón más para suponer que el PRI volverá a contar con la mayoría ciudadana en las urnas, con lo que podrá conservar el poder aún en una competencia electoral limpia. En efecto, el equipo salinista ha manifestado su confianza de que la legitimación que no pudo obtenerse

a través de las elecciones de julio, se conseguirá por vía de la gestión económica de su administración. Es posible que eso suceda. Pero es difícil precisar qué tanto debe recuperarse la economía para que el partido oficial se revitalice, pues si bien es sensato suponer una relación directa entre ambas variables, no necesariamente lo están en la misma proporción: a un alto nivel de restablecimiento económico le podría corresponder uno menor en lo que hace a la reconquista del voto priísta. Ello en virtud de que el sufragio en contra del PRI pudo haber respondido a otras causas, además del deterioro de la economía, como lo sugieren algunas encuestas.

La evolución política del país depende en gran parte del comportamiento de esas variables, de cómo haya asimilado la ciudadanía la experiencia del 6 de julio. El resarcimiento del partido oficial es tal vez viable. Pero tampoco es imposible que se haya rebasado la línea en la que, haga lo que haga el PRI, ya no podrá recobrar la confianza de la mayoría ciudadana. Tendremos que esperar algún tiempo para saberlo a ciencia cierta. Sin embargo, es posible darnos alguna idea de por dónde van las cosas, por ejemplo a través de nuevas encuestas de opinión. En caso de que el partido gobernante haya perdido su credibilidad de manera definitiva, le será imposible contener con reglas equitativas y ganar. Se verá tentado a cerrar el sistema para conservar el poder, con lo que las posibilidades de acceder a la democracia pacíficamente se verán sumamente reducidas.